ALICANTE / La Junta de Usuarios acude al Defensor del Pueblo para que la escuche Narbona

Sigue el cruce de acusaciones entre Espinosa y Marugán, que le acusa de «seguir enrocado en el partidismo»

BERNAT SIRVENT

JUNTOS. Marugán y Martínez Espinosa, el lunes en Novelda. / M. C.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja acudirá la próxima semana al Defensor del Pueblo para que «nos escuche el Ministerio de Medio Ambiente». Según explicó ayer a este diario su presidente, Andrés Martínez Espinosa, que en el año 2005 fue despedido de Aguas del Júcar por su frontal oposición al cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, se ha solicitado en noventa ocasiones un encuentro formal con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y no ha habido ni contestación.

El escenario entre la entidad que aglutina a la mayoría de futuros usuarios del agua del trasvase y los represenantes del Gobierno central sigue igual de tenso. El cruce de acusaciones sigue, porque el consejero delegado de Acuajúcar, José María Marugán (mano derecha de Moragues), insistió ayer en que Martínez Espinosa «sigue enrocado en sus planteamientos políticos y partidistas, sin dar pie a ningún tipo de negociación».

Según Marugán, en un acto celebrado el lunes en Novelda para presentar la mejora de los regadíos de La Romana y la canalización entre el embalse del Toscar y Salinas correspondiente al postrasvase, el representante de Acuajúcar ofreció a Espinosa «negociar sobre calidad y precio del agua y reflexionar, pero sigue enrocado y no hay nada que hacer, al menos hasta las elecciones, para ver si consigue que se cambie el tazado si hubiera un cambio del Gobierno central», añade Marugán. «A estas alturas, nadie se cree en el sector agrícola que Andrés Martínez defienda su interés, sino sólo el de un partido político», sentencia el consejero de Acuajúcar, empresa que sigue adelante con la tramitación y construcción de la tubería entre Culllera y Villena.

Regulación

Martínez Espinosa, que ha sido incluido recientemente en el grupo de trabajo de medio centenar de personas que trabajarán en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico del Júcar, instrumento legal que regulará el funcionamiento de la transferencia, justifica esta teórica aproximación: «Estamos donde nos corresponde, porque no se ha impuesto el sentido común y porque la Junta no es sino una entidad de derecho público adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar, desde el año 2003, con potestad para representar a regantes y usuarios».

Espinosa niega que siga «enrocado», como le acusa Marugán. «Nosotros sólo exigimos agua de calidad a un precio razonable y que sirva tanto para el regadío como para los abastecimientos de nuestras ciudades», añade Espinosa.

Preguntado por la posibilidad de que se retrasara la toma del trasvase hasta el Azud de Antella, cinco kilómetros aguas arriba del punto previsto por el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente de la Junta asegura que «sería una buena noticia». Niega que los usuarios actúen «a golpe de elecciones» y alerta de que «nos tendremos que ir del Vinalopó si sigue adelante la postura del Ministerio».

La radiografía del nivel de ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó es el siguiente. Marugán explica que están ya aprobados y elevados a definitivos los proyectos constructivos de los tramos C, D y E, entre Barxeta y

Játiva y la balsa de Moixent.

Las expropiaciones están hechas en los tramos C y E, y en el tramo D «tendremos el suelo la primera semana de noviembre». En el Ministerio, en Madrid, están ya los proyectos constructivos de los tramos A y B, una vez supervisados por los técnicos de la CHJ. «Lo que ocurre es que suelen tardar del orden de treinta o curante días para aprobar definitivamente dichos proyectos desde que los mandamos. En definitiva, antes de fin de año los cinco tramos nuevos estarán en obras», sentencia Marugán.